

Santiago, doce de junio de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán, que rechazó el de nulidad interpuesto contra la de instancia que desestimó la demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales y acogió la de declaración de existencia de un contrato de trabajo entre las partes, desde el 10 de marzo de 2021 al 31 de marzo del 2022, y de despido injustificado, y condenó a la demandada al pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, indemnización por años de servicios, más incremento legal del 50%, y al pago de la suma de \$18.900.000, por lucro cesante, en razón de las rentas que dejó de percibir el actor desde la fecha del despido, 1 de abril de 2022, al 31 de diciembre de 2022, y feriados, sin costas.

Segundo: Que según se expresa en la legislación laboral, el recurso de unificación de jurisprudencia es susceptible de ser deducido en contra de la resolución que falle el recurso de nulidad, estableciéndose su procedencia para el caso en que *“respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia”*, conforme lo explicita el artículo 483 del Código del Trabajo.

Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, aparece que esta Corte debe controlar, como requisitos para su admisibilidad, por un lado, su oportunidad; en segundo lugar, la existencia de fundamento, además de una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia, sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores de justicia, y finalmente, debe acompañarse copia del o los fallos que se invocan como fundamento del recurso en referencia.

Tercero: Que la materia de derecho propuesta para ser unificada consiste en *“Determinar la procedencia de la indemnización por lucro cesante cuando, declarada judicialmente una relación laboral, con un órgano de la Administración del Estado, se le puso término anticipado a dicha vinculación, presumiendo que el contrato es de plazo fijo”*.

Cuarto: Que, con relación al tema jurídico planteado para ser uniformado, se ofreció a modo de contraste, las sentencias dictadas por esta Corte en las causas Roles N°18.186-2017 y N°46.607-2022.



La primera, tratándose el actor de un ingeniero comercial, concluyó, en lo pertinente, que acreditado que desde el 1 de septiembre de 2013 se desempeñó mediante tres sucesivos e ininterrumpidos contratos a honorarios, como administrador de las residencias indígenas y de la beca de residencia indígena en la unidad de becas de la Dirección Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, en cuanto a lo pretendido por concepto de lucro cesante, resulta contradictorio sostener que la vinculación entre las partes debe someterse a la reglamentación del Código del Trabajo, teniendo en consideración que, en ese escenario, se habría configurado una relación de carácter indefinida, lo que hace improcedente lo pretendido por este concepto.

La segunda, declarada la relación laboral con el municipio desde el mes de abril a junio de 2021, esto es, por un periodo menor a un año, sostuvo que un elemento a considerar es el principio de continuidad, en particular en lo que concierne a una de sus proyecciones, cual es, la preferencia por los contratos de duración indefinida. Tal preferencia supone que cuando la judicatura debe establecer las cláusulas de un contrato de trabajo no escriturado, aplicando la presunción legal prevista en el inciso cuarto del artículo 9° del Código del Trabajo, presuma las características propias de un contrato de trabajo típico o general, como es el descrito en su artículo 7°, pues las modalidades requieren prueba, no bastando con la sola declaración de la trabajadora para transformar un contrato que por regla general es indefinido a uno sujeto a un plazo o fecha determinada. En la especie, indica, se estimó que la verdadera naturaleza del contrato celebrado entre las partes era un contrato de trabajo, lo que conduce lógicamente a prescindir de las formalidades y estipulaciones del contrato a honorarios suscrito, entre las cuales se encuentra una vigencia determinada, por lo que resulta evidente, como lo destaca la sentencia rol N°18.186-2017, invocada por la recurrente, que se produce una contradicción al perseguir, por una parte, la declaración de laboralidad y, por otra, querer hacer efectivo el plazo consignado en un documento que fue superado por la realidad de la vinculación.

Luego, en su sentencia de reemplazo, agregó que, establecido que la contratación de la actora no se ajustó a la hipótesis prevista en el artículo 4° de la Ley N°18.883 y que en su desarrollo concurrieron elementos propios de una relación laboral, bajo vínculo de subordinación y dependencia, ello condujo a prescindir del convenio a honorarios suscrito por las partes y a declarar que el vínculo se rige por la normativa del Código del Trabajo, cuyo artículo 9° inciso cuarto declara que *“la falta de contrato escrito hará presumir legalmente que son estipulaciones del contrato las que declare el trabajador”*. Dicha presunción, no obstante, debe considerar el principio de continuidad o estabilidad laboral que



determina que la regla general, de acuerdo a los artículos 7° y 8° del mismo cuerpo legal, sea el contrato de trabajo indefinido, lo que permite colegir que esa es la naturaleza del celebrado por las partes, conclusión que conduce, necesariamente, a rechazar la pretensión de la actora de acceder a una indemnización por lucro cesante equivalente a las remuneraciones del período que medió entre el término injustificado del contrato y el plazo a cuya llegada se había limitado la vigencia del convenio a honorarios que le sirvió de antecedente”.

Quinto: Que, por su parte, la sentencia impugnada, en lo pertinente, rechazó el arbitrio de nulidad fundado en la causal subsidiaria del artículo 477 del Código del Trabajo, afincada en la infracción a los artículos 7, 8, 159 N°4 y 168 del mismo Código, por cuanto esgrimió que fueron hechos acreditados en la causa, que el actor se desempeñó para la demandada desde el 10 de marzo de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022, cumpliendo funciones de supervisor de seguridad, suscribiendo un contrato que se denominó a honorarios y que se pactó con una vigencia desde el 10 de marzo de 2021 hasta 31 de diciembre de 2022, no obstante, la demandada le puso término en marzo de 2022, esto es, nueve meses antes del plazo prefijado por las partes para su conclusión y que, en lo relativo a que resulta contrario a derecho al pago de una indemnización por lucro cesante, dado que la relación era de naturaleza laboral y, por tanto, de naturaleza indefinida, pues esta es la regla general en esta rama del derecho, sostiene, que ello no resulta atendible, puesto que sin desconocer la afirmación de la recurrente, nuestro derecho admite los contratos a plazo fijo con una duración máxima de dos años y solo en el caso que el contrato respectivo se haya prorrogado dos veces ipso jure.

En consecuencia, habiéndose determinado que el contrato era de plazo fijo, atendido el lapso por el cual fue pactado, parece ajustado a derecho concluir la condena al pago de las remuneraciones que el actor debió percibir entre abril y diciembre de 2022, por concepto de lucro cesante, pues dicha indemnización corresponde a la cantidad de dinero que razonablemente el dependiente pudo percibir de no mediar la terminación unilateral del contrato, dispuesta por la demandada.

Sexto: Que, como se señaló, para la procedencia del recurso en análisis es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se arribe a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia que deba ser uniformada.



Así, la labor que corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma que regla la controversia al ser enfrentada con una situación equivalente resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el impugnado y los traídos como criterios de referencia.

Séptimo: Que a la luz de lo expuesto y realizado el examen descrito con relación a la materia para unificación, tal exigencia no aparece observada, desde que las sentencias de contraste consideran, la primera, la suscripción por el demandante de tres sucesivos e ininterrumpidos contratos a honorarios, calificados como contratos de trabajo, desde el 1 de septiembre de 2013 al 1 de enero de 2016, con lo que se configuró una relación indefinida, teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 159 N°4 del Código del Trabajo al tratarse de un ingeniero comercial, quien mantiene un título profesional o técnico otorgado por una institución de educación superior del Estado o reconocida por éste, en que la duración del contrato no puede exceder de dos años. Distinto del actor, quien no tiene tal título profesional y, por ende, su contrato a plazo fijo únicamente podía perdurar por el lapso de un año, según lo dispuesto en igual norma.

La segunda, se refiere a un contrato de trabajo que duró menos de un año.

Así, debe ser decretada la inadmisibilidad del recurso interpuesto por la parte demandante, puesto que la necesidad de uniformar la materia propuesta y la disparidad de decisiones respecto de la misma, que la ley exige y que se proponen como argumento para sostenerlo, no se advierte concurrente, teniendo además presente, el carácter excepcional y especial de este arbitrio, reconocido expresamente por el artículo 483 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y normas citadas, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto contra la sentencia de dieciocho de abril de dos mil veinticuatro.

Regístrese y devuélvase.

N°16.388-24.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H., y los Abogados Integrantes señora Leonor Etcheberry C., y señor Eduardo Gandulfo R. No firma la ministra señora Gajardo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar en comisión de servicios. Santiago, doce de junio de dos mil veinticuatro.





En Santiago, a doce de junio de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

